

# Insurrección e institución

## El caso chileno<sup>1</sup>

*Vladimir Safatle*

■ Doi: 10.54871/ca24113a

*Sería muy fácil hacer historia universal si nos uniéramos a la  
lucha solo con la condición de sabernos victoriosos.*

—Karl Marx

Tal vez algún día seremos capaces de comprender toda la reflexión política que exige movilizar la noción de “lugar”. Los acontecimientos políticos ocurren en un lugar, e incluso cuando ocurren simultáneamente en varios lugares, la variedad siempre preserva su heterogeneidad, siempre preserva la posibilidad de que cada uno de esos lugares específicos se conviertan en puntos de partida de secuencias autónomas de nuevos acontecimientos. Los lugares son puntos de sobredeterminación que condensan distintas series de procesos y movimientos (David-Menard, 2022).

Puede parecer una perogrullada comenzar un texto diciendo algo aparentemente trivial: que los acontecimientos ocurren en un lugar. Pero de esa trivialidad se desprenden consecuencias que no son siempre debidamente atendidas. Una de ellas es que pensar un

<sup>1</sup> Traducción de Natalia López R. y Alejandra Bottinelli.

acontecimiento político exige un esfuerzo por pensar desde su lugar. Esto implica admitir que los lugares piensan y que, si quisiéramos escuchar sus pensamientos, sería necesario moverse en el espacio. Ir y escuchar a las personas, dejar que el pensamiento sea violentado por lo inesperado. De hecho, la reflexión política sería mucho mejor si las personas hablasen menos, escucharan más y se movieran más.

No obstante, podemos plantear algunas interrogantes sobre lo que debe entenderse por “escucha” en este contexto. ¿En qué condiciones es posible escuchar la complejidad de un acontecimiento político? Podríamos intentar desarrollar una extensa investigación de campo, como una especie de antropología de los fenómenos políticos que trabajaría preferentemente con encuestas, *focus groups*, cuestionarios y otros instrumentos de análisis empírico que movilicen universos cuantitativos relevantes. Es innegable que de esta manera pueden lograrse resultados significativos. Una metodología que evitaría el riesgo de trabajar solo con fuentes secundarias, con textos analíticos y artículos periodísticos.

Pero podemos operar metodológicamente de otra manera, a partir de lo que podríamos llamar “construcción de cartografías de líneas de fuerza”. Esto significa que en los lugares donde emergen los acontecimientos buscaremos visualizar las principales líneas de fuerza que configuran las dinámicas del acontecimiento político. Esto puede lograrse con otra forma de entrevista, más extensa y cualitativa. Una que no esté marcada por la repetición de cuestionarios, sino que se despliega como una entrevista abierta que pretende, ante todo, profundizar en los indicios causales ofrecidos por los mismos entrevistados y entrevistadas. En este sentido, su función no es estadística, sino cartográfica. Se trata entonces de brindar una cartografía de fuerzas que permita que el pensamiento configure de mejor manera las potencialidades y los riesgos de un acontecimiento. Por lo tanto, el universo de entrevistas no tiene que ser estadísticamente relevante. En cambio, tiene que ser lo suficientemente diverso para aprehender las dinámicas del proceso a partir de sus múltiples actores.

Este método de análisis lo usé por primera vez en el 2012 cuando viajé a los países que vivieron el surgimiento de la Primavera Árabe, como Túnez y Egipto. También lo usé en el 2013, cuando fui tras el levantamiento de la insurrección popular en Islandia después de la crisis económica. Fue con este mismo espíritu que llegué a Chile en el 2022, poco antes de que Gabriel Boric asumiera el gobierno, para realizar dieciocho entrevistas a activistas, políticos/as, académicos/as, periodistas, médicos, sindicalistas, escritores/as sobre la dinámica de la transformación estructural que estaba atravesando su sociedad. El momento elegido también era relevante, pues permitió escuchar el inicio de un proceso lleno de expectativas y riesgos. En este proceso conté con la invaluable ayuda de la historiadora Natalia López Rico, a quien agradezco aquí, además de haber estado acompañado por el fotógrafo Ralph Baiker.

## **Un siglo de insurrecciones populares**

Diez años separan al primer y último de los viajes mencionados. Sin embargo, forman parte de un proceso común. Insistir en este punto es una forma de resaltar la centralidad de la noción de “insurrección” como operador de acontecimientos políticos, especialmente en países que alguna vez fueron llamados del “Tercer Mundo”. Conocemos a varios analistas que, después del colapso de la organización de la clase obrera en partidos de masas con aspiración revolucionaria, afirmaron el ineluctable “fin de la política” (Balibar, Negri y Tronti, 2021). No obstante, tal colapso, por mucho que plantee cuestiones reales de la organización y fuerza de cambio, no constituyó el fin de los procesos insurreccionales. De hecho, podríamos incluso arriesgar una proposición de la filosofía de la historia y afirmar que el siglo XXI nace de una secuencia insurreccional mundial que articula Sur y Norte en una resonancia de malestar social ligada al impacto del aumento del empobrecimiento y las dinámicas de concentración de la riqueza provocadas por el neoliberalismo. Esta secuencia, posible

embrión de nuevas formas sociales, tiene que ser nombrada como tal para que ganemos una comprensión más exacta de nuestro momento histórico y sus potencialidades reales. Es decir, sería posible defender la tesis de que la característica política más importante del siglo XXI es una impresionante secuencia de insurrecciones populares en lucha contra el Capital y la recuperación paulatina de la soberanía de las masas desposeídas. Este proceso trae consigo una articulación entre la reconfiguración micropolítica y la desidentificación con las macroestructuras. Hablamos aquí de “desidentificación” para resaltar la forma en que las poblaciones se vuelcan contra las instituciones y las estructuras estatales, vistas como vaciadas de su capacidad real de representación política. Estas poblaciones no solo se manifiestan como portadoras de demandas que deberían ser cumplidas por instancias reconocidas del poder, sino como fuerza destituyente.<sup>2</sup> Esto explica por qué muchas de estas insurrecciones comienzan con demandas puntuales vinculadas al costo de vida, a los precios del combustible, al aumento de los costos de transporte, y luego se convierten en expresiones generales de desidentificación social.

Sin embargo, para quienes buscan preservar el sistema de parálisis propio de nuestra situación actual, es importante que no sea identificada esta dinámica, que las insurrecciones aparezcan como revueltas dispersas y discontinuas, que el rechazo a la representación política que por lo general vehiculan sea comprendido como una regresión antipolítica cuyo horizonte natural de incorporación serían los “populismos”: un término cuya vaguedad analítica oculta su verdadera estrategia política. Una estrategia que consiste en hacernos creer que cualquier deseo de salir de los límites de la democracia liberal solo puede ser una expresión de regresión política potencialmente autoritaria y afectivamente irracional. Borrar la secuencia insurreccional del siglo XXI forma parte de una estrategia más amplia de limitar la imaginación política de las masas. El primer

<sup>2</sup> El uso de este concepto para el caso chileno fue realizado, entre otros, por Rodrigo Karmy Bolton (2019).

paso fue la descalificación generalizada de la noción de revolución, un proceso que cobró fuerza con el fin de las sociedades burocráticas de Europa del Este. El esfuerzo monumental, realizado en los últimos treinta años, de borrar el concepto de “revolución” del centro de la reflexión política expresaba la idea de que las democracias liberales serían capaces de gestionar los conflictos sociales que apareciesen en su seno. La elección de las palabras aquí no es casual. Se trataba efectivamente de una “gestión” y de entender las luchas de clases como meros “conflictos sociales”. En este contexto, “gestión” significa impedir que el malestar social se convierta en un deseo de transformaciones estructurales. Como un “gerente”, se trata de encontrar la asignación adecuada de recursos para optimizar los compromisos. Pero como ya no se encuentra operativo el horizonte de ajustes graduales prometidos por el Estado de bienestar social, como los últimos veinte años han estado marcados por crisis de descomposición de los sistemas de derechos laborales y un aumento exponencial de los procesos de concentración, como las macroestructuras de protección social fueron desmanteladas (Streeck, 2016) sin que ni siquiera las catastróficas consecuencias de una pandemia mundial haya tenido la capacidad de recomponerla, se trata entonces de gestionar el malestar por medio de la generalización de situaciones bélicas, elevando al miedo como afecto político central.<sup>3</sup>

La guerra, como primera forma de acumulación capitalista y sistema de movilización de afectos, se convierte así en el principal horizonte de organización social y funcionamiento gerencial de nuestra estructura normativa.<sup>4</sup> Se convierte en la única forma de garantizar cierta cohesión social en un mundo que expulsó de su horizonte de reproducción material toda forma de cohesión real. Por eso, es llamativo que el tema de la revolución desaparezca del debate y de la acción política en el preciso momento en el que las democracias liberales aumentan el uso del aparato policial contra las poblaciones,

<sup>3</sup> Sobre el miedo como afecto político central, véase Safatle (2016).

<sup>4</sup> Véase al respecto, Agamben (2004) y a Eric Alliez y Maurizio Lazarratto (2021).

brutalizan a los refugiados, reorganizan los derechos civiles y fortalecen los dispositivos de control y disciplina basados en la generalización de las situaciones de guerra. Esto es así, vale decir, cuando las mismas democracias liberales no son acosadas por otra revolución, una revolución conservadora comandada por la fuerza de movilización de la extrema derecha. Fuerzas que naturalmente utilizan el tema de la guerra permanente (contra los inmigrantes, contra los “comunistas”, contra quienes amenazan la familia, etc.) como factor de movilización y gobierno.

Sin embargo, el análisis de los procesos políticos concretos de los últimos diez años nos muestra que el eje político central del siglo XXI no puede solo entenderse desde la movilización del miedo y de su dinámica de guerra generalizada principalmente desde el 11 de septiembre del 2001, con el atentado al World Trade Center. Es cierto que, desde entonces, el siglo parece inscribirse bajo el signo de la “amenaza terrorista” que nunca sucede, y que se convierte en una forma normal de gobierno. Esta fue la manera de poner nuestro siglo bajo el signo paranoico de la frontera amenazada, de la identidad invadida, del cuerpo que debe inmunizarse, del choque de civilizaciones. Como si nuestra reivindicación política fundamental fuera, en una retracción de horizontes, seguridad y protección policial.

No obstante, es necesario llamar la atención sobre la emergencia de otro eje de eventos y acciones. Para eso, hay que insistir que el siglo XXI comenzó en una pequeña ciudad de Túnez llamada Sidi Bouzid, el día 17 de diciembre de 2010. Es decir, comenzó lejos de los centros del capitalismo global. Comenzó en la periferia. En aquel día, un vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, decidió hacer un reclamo al gobernador regional exigiendo la devolución de su carrito de venta de frutas, que había sido confiscado por la policía. Víctima constante de extorsiones policiales, Bouazizi fue hasta la sede del gobierno con una copia de la ley en su mano. Fue recibido por un policía que rompió la copia en frente suyo y le dio una bofetada en la cara. Entonces, Bouazizi prendió fuego a su propio cuerpo. Después de este evento, en Túnez empezó una enorme agitación y el gobierno

de Ben Ali cayó, provocando insurrecciones en casi todos los países árabes. Así comenzaba el siglo XXI: con un cuerpo sacrificado por no aceptar someterse al poder. Y así comenzaba la Primavera Árabe, con un acto que decía: mejor la muerte que la sumisión, con una conjunción muy particular entre una “acción restringida” (quejarse de la incautación del carrito de venta de frutas) y una “reacción agonística” (inmolarse) que reverbera por todos los poros del tejido social.

Desde entonces, el mundo será testigo de una secuencia de insurrecciones que durará diez años. Occupy, Plaza del Sol, Estambul, Brasil, Francia (Chalecos Amarillos), Tel-Aviv, Santiago: estos son solo algunos de los lugares por donde pasó este proceso. Y en Túnez ya se podía ver lo que el mundo vería en esos diez años: múltiples sublevaciones que sucedían al unísono, que rechazaban el centralismo y que articulaban, en la misma serie, revoluciones micropolíticas y desidentificación macropolítica, reconfiguración de las potencialidades de los cuerpos y rechazo a la representación política. La mayoría de estas insurrecciones se enfrentará a las dificultades de los movimientos que despiertan contra sí las reacciones más brutales, que se enfrentan con la organización de los sectores más arcaicos de la sociedad en el intento de preservar el poder tal y como siempre ha sido. Pues durante una década la desidentificación macroestructural no ha sido capaz de encarnarse en un proceso de conquista de espacios macropolíticos. Esto hizo que muchos identificaran una dinámica destinada a la dispersión y al fracaso.<sup>5</sup>

Por otro lado, vimos la proliferación de discursos que creían que la transformación de las estructuras del deseo y de la sexualidad y las nuevas circulaciones micropolíticas de los cuerpos serían suficientes para transformar la estructura. De ahí el abandono teórico de una dimensión de la acción política marcada por la conquista del Estado y por el intento de modificar estructuralmente las formas de producción de valor y de descomponer la sociedad del trabajo. Es por eso que la secuencia de insurrecciones mundiales adquiere otra

<sup>5</sup> Como vemos en Badiou (2011).

dimensión desde el momento en que la conquista de las macroestructuras de poder es retomada. Este cambio cualitativo se dio, por primera vez, en el país conocido en la historia mundial como el laboratorio de implementación del neoliberalismo, es decir, en Chile. De esta forma, podemos decir que con el desplazamiento del núcleo del proceso insurreccional hacia Chile se abre una nueva secuencia en las insurrecciones populares del siglo XXI. Sin embargo, este desplazamiento será difícil de realizar. Enfrentará nuevos desafíos y derrotas cuyo sentido debe mantenerse como objeto de reflexión.

## **Institucionalización insurreccional**

El 11 de marzo de 2022 un nuevo gobierno se inició en Chile con la pose presidencial de Gabriel Boric. No se trató de un simple cambio de gobierno dentro de un sistema de alternancia típico de la democracia liberal. Este fue más bien el comienzo de un momento tenso, lleno de dinámicas imprevisibles, con retrocesos e intentos de avance. Algo por lo menos singular si recordamos lo que estamos viviendo en nuestro momento histórico actual, marcado por la parálisis de las fuerzas de transformación estructural, por el repliegue de la “fuerza ofensiva” de la clase obrera contra el Capital<sup>6</sup> y por lo que otros antes que nosotros llamaron “retracción de horizontes de expectativas”.<sup>7</sup> Por eso, no será sin sorpresa que oímos afirmaciones como esta, del profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile Rodrigo Karmy Bolton: “Este es el fin de un ciclo histórico, ahora se abre un nuevo ciclo de luchas” (comunicación personal, marzo de 2022).<sup>8</sup> Pero ¿qué legitima esta idea de que está por verse en Chile la apertura de un nuevo ciclo de luchas?

<sup>6</sup> Véase Mario Tronti (2016).

<sup>7</sup> Véase Paulo Arantes (2018).

<sup>8</sup> Todas las comunicaciones personales en este texto corresponden a entrevistas realizadas por el autor, en marzo de 2022, dentro del proyecto “El futuro de la democracia”,

Inicialmente podemos decir que el 11 de marzo de 2022 en Chile es un punto de inflexión, claramente el primero, pero no el último, en una secuencia de procesos insurreccionales del siglo XXI. Primero debemos recordar las situaciones habituales en las que los gobiernos son elegidos y buscan usar su legitimidad electoral para modificar instituciones y estructuras que se han revelado incapaces de hacer realidad las aspiraciones populares de libertad e igualdad. Pero hasta ahora no habíamos visto el proceso invertido, es decir, insurrecciones populares que empiezan por cambiar instituciones y leyes para impulsar, en medio del proceso, el ascenso electoral de nuevos gobiernos. Esto fue lo que ocurrió en Chile. Una mudanza en el orden de los factores que creó una dinámica política inusitada. En estos casos, el gobierno no es exactamente el artífice y conductor de las transformaciones, sino más bien una especie de actor que las garantizaría y potenciaría. Incluso el propio gobierno se entendió más como un “guardián” de los procesos de cambio que como su actor fundamental. En más de una ocasión Boric se refirió a que la función del gobierno es impedir que se bloquee el proceso de cambio.

Es por eso que Chile parece un caso singular en la articulación entre insurrección e institución. Este carácter completamente único del proceso chileno se encuentra en que produjo lo que podríamos llamar una “institucionalización insurreccional”, pues fue resultado de una insurrección que de inmediato exigió una nueva institucionalidad. Los islandeses intentaron algo parecido cuando ocurrió la crisis económica del 2008 que condujo a las manifestaciones populares más grandes de su historia.<sup>9</sup> Las manifestaciones terminaron por producir una nueva constitución a través de la participación aleatoria de 950 personas para el anteproyecto y posterior elección de una Asamblea Constituyente compuesta por veinticinco miembros. Sin embargo, aunque fue aprobada por un referendo en el 2012,

---

financiado por el The New Institute/Hamburg. Esta investigación también contó con el apoyo de la Revista *Cult de Brasil*.

<sup>9</sup> Sobre la crisis islandesa, véase al respecto Valur Ingimundarson, Philippe Urfalino e Irma Erlingsdóttir (2016).

el Parlamento elegido en 2013 rechazó la nueva carta y congeló el proceso. Así, Chile parecía el caso más avanzado en el que se materializaba un principio fundamental de los procesos revolucionarios, a saber, pasar de la insurrección a la transformación institucional global. Una revolución puede describirse como el tránsito de una insurrección popular a la fundación de nuevas estructuras institucionales. El siglo XX fue testigo de varios de estos procesos impulsados por dinámicas de organización militar, mientras el siglo XXI parece buscar inicialmente formas de llevar a cabo este proceso por vías desarmadas. En este contexto, la refundación constitucional parece una vía privilegiada. Sin embargo, tal como sucedió en el caso islandés, la Constitución chilena tampoco entró en vigor. Siendo objeto de un rechazo popular contundente el 4 de septiembre del 2022, comprender el destino del proceso constitucional chileno exige una contextualización previa de su sentido y limitaciones. La vía desarmada se enfrenta a la abierta organización reaccionaria que más allá de ser una simple emulación de los sectores conservadores de la prensa y del empresariado, encuentra un fuerte apoyo popular. Poder enfrentar ese apoyo popular es un desafío que exige comprender de forma detallada el proceso institucional y sus contradicciones.

Que Chile haya vivido una insurrección popular en el 2019 es algo que puede ser mejor descrito a través de algunas de las personas que participaron de este proceso en su línea de frente. Patricio Bustamante es médico y director del Departamento de Tecnología médica de la Universidad de Chile. Su especialidad es el trauma ocular. Durante la insurrección popular de 2019, Patricio se vio involucrado directamente en la revuelta social cuando tuvo que recibir casos, cada vez más constantes, de personas víctimas de balas de goma en los ojos. En Chile, 450 personas quedaron ciegas al menos de un ojo como resultado de la acción policial. Es un procedimiento relativamente estándar de las fuerzas policiales en estos días. Lo que no deja de ser una ironía macabra. La metáfora es muy explícita: el poder actúa cegando a las personas, quitándoles los sentidos, mutilando sus

cuerpos: “tuvimos casos de personas que perdieron tres sentidos, la visión, el olfato y el oído” (comunicación personal, marzo de 2022).

Patricio describe la situación de guerra vivida en su hospital en 2019. Ubicado cerca del epicentro de las protestas, a saber, la Plaza Italia, desde entonces renombrada como Plaza Dignidad, el hospital, que recibió cientos de personas atacadas por balas que no solo tenían goma, también recibió bombas lacrimógenas en sus pasillos. Algo muy parecido a lo que describe Marcela Leiva, activista e integrante del movimiento No+AFP (No Más Fondos de Pensiones), que lucha por el fin del sistema de pensiones privado chileno que ha sido vendido a otras partes del mundo como una verdadera renovación del sistema de pensiones a través de la capitalización individual. Marcela organizó junto a sus vecinos la acogida de manifestantes que se encontraban en las calles del barrio, recuerda el día en que se encontraban más de treinta cuerpos en su calle recibiendo cuidados médicos: “era una situación de guerra. Empezamos a preguntarnos cómo defendernos, quién tenía armas para darnos y enfrentar a la policía. Llegamos incluso a pensar: bueno, entonces vamos a pedirle a los narcos” (comunicación personal, marzo de 2022).

María Rivera Iribarren fue una diputada constituyente. Abogada vinculada a la Defensoría del Pueblo, organismo que brinda apoyo jurídico a los movimientos sociales, fue presa política durante la dictadura militar. María describe las insurrecciones de 2019 que experimentó Chile como “manifestaciones revolucionarias”:

Diría que las revueltas de 2019 fueron el inicio de una revolución porque todos decían que había que cambiar todo. Hubo un levantamiento violento de las masas que, por un instante, nadie podía controlar. Como se decía en ese momento: nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo (comunicación personal, marzo de 2022).

Alejandra Bottinelli, profesora de literatura de la Universidad de Chile, militante con una fuerte participación en grupos vinculados al gobierno que se inició el 11 de marzo, remite a una figura concreta para aquel descontrol:

Muchas personas decían que no se sabía para dónde iban las manifestaciones, que sus pautas eran confusas. Y, de hecho, era interesante que no hubiera dirección, pero me refiero a dirección geográfica. No obedecían al camino de todas las manifestaciones en Santiago. Eran realmente movimientos de cuerpos sin dirección (comunicación personal, marzo de 2022).

Por esas ironías de la historia, el resultado de esa ausencia de dirección fue ir exactamente hasta el lugar donde las manifestaciones no habían llegado antes. Moverse sin dirección puede ser peligroso, pues se puede terminar llegando al objetivo. Como decía Hegel, el miedo a equivocarse muchas veces esconde el miedo a la verdad. En este caso, la verdad es otro nombre para los espacios de negocios y representación del Capital:

Todo cambió cuando las manifestaciones se dirigieron hacia el Costanera Center [el centro comercial más grande de Santiago, ubicado en el, hasta ahora, edificio más alto de América Latina]. Fue como si se hubiera traspasado una frontera. Desde ahí quedó claro para los sectores de la burguesía que era necesario negociar (comunicación personal, marzo de 2022),

dice Paulo Slachevsky, editor de LOM ediciones, una de las editoras de libros en humanidades más importantes del país.

Todo esto lleva a preguntarnos cómo se sostiene una situación de esta naturaleza. ¿Qué hace que las personas, en determinadas circunstancias, no retrocedan, ni siquiera ante cuarenta y cinco muertos por la represión policial, ni siquiera viendo a su calle transformada en hospital de guerra? ¿Qué hace que los sujetos lleguen a afirmar: “Conseguimos algo único que es cambiar a través de las protestas, como si estuviéramos diciendo que ya no íbamos a aguantar cualquier cosa. Por eso, no tengo miedo de lo que va a pasar de ahora en adelante”, como dice Patricio? ¿En qué condiciones se da ese paso del desamparo a la valentía como afecto político fundamental?

Jaime Bassa, quien fuera diputado constituyente y vicepresidente del Proceso constitucional en su primer mandato, recuerda que,

durante treinta años, Chile estuvo atravesado por varias revueltas que daban cuenta del malestar contra las formas de reproducción social. Revueltas estudiantiles, revueltas contra el sistema de pensiones, conflictos socioambientales: “Pero era necesario que muchas personas se reconocieran como portadoras del mismo malestar” (comunicación personal, marzo de 2022).

El enunciado de Bassa demuestra cómo el proceso de unificación de demandas en un horizonte histórico marcado por la ausencia de sujeto político unificado puede darse de manera distinta a la de incorporar a todos en un significativo vacío, como defiende Laclau (2010) al hablar de las incorporaciones populistas. En medio de la escalada de la revuelta, el gobierno de Piñera decretó el estado de excepción, revelando cómo, cuando se siente acorralado, el poder estatal “democrático” actúa como si estuviera en una situación de dictadura: “nos dimos cuenta de cómo, en situaciones como esta, las cosas realmente no habían cambiado”, señala Bassa. El estado de excepción tuvo la capacidad de unificar las demandas y llevarlas a otra etapa. El malestar compartido apareció en la forma de un poder que los atacaba a todos y todas sin distinción. El resultado más concreto de esta violencia fue llevar a los manifestantes a exigir un proceso constitucional que por fin librara al país de la Constitución de 1980 y sus excepciones legales, herencia del gobierno de Pinochet. Es decir, la agenda del cambio constitucional no existía al inicio de las manifestaciones. Apareció como reacción al decreto de estado de excepción.

Este efecto catalizador de la violencia estatal también fue recordado por Marcela Leiva cuando trató de explicar de dónde había salido la capacidad de organización popular durante los días de la revuelta en 2019. En pocos días aparecieron grupos para cuidar a los heridos, para organizar las comidas, es decir, toda una estructura fundamental para sostener la continuidad de las luchas en la calle. Marcela recuerda los grupos de organización vecinal que en Chile se llaman “juntas de vecinos” que tienen un estatuto legal. Frecuentemente ejes de estructuras disciplinares en la vida de los barrios y localidades, en

determinadas situaciones algunas juntas se convirtieron en embriones de estructuras comunitarias de apoyo a las revueltas. Es decir, la política no sabe de espacios vacíos. Se trata siempre de un agenciamiento que se apoya en procesos existentes de organización popular, incluso aunque dicha organización tenga sus límites.

Este es un dato significativo. En situaciones donde las demandas sociales son múltiples y heterogéneas, resultado de una multiplicidad de actores sociales autónomos entre sí, muchas veces es un factor externo el que permite la unificación de las demandas. Cuando este factor no es un principio unificador de las luchas o un horizonte utópico común de transformaciones, la violencia del Estado puede servir como una fuerza de cohesión. Funciona por contraposición generalizada.

La constitución heredada de Pinochet fue una pieza fundamental de la reconstrucción neoliberal del laboratorio en que se convirtió la sociedad chilena. Llegó tan lejos que, por ejemplo, impidió legalmente al Estado establecer empresas públicas, creando las condiciones legales para un proceso descrito por Bassa como “la mercantilización de la vida cotidiana”. Una mercantilización perfectamente expresada en un cartel que puede verse en varios lugares de Santiago: “hicieron de nuestras necesidades sus mejores negocios”. En la base de la constitución de 1980 está la idea del mercado como modelo fundamental de organización social y la transformación del Estado en “Estado subsidiario”, es decir, un Estado que traslada al mercado todas las formas de iniciativa social. Es por esta razón que un eje principal de las demandas de transformación en la sociedad chilena fue la transformación del “Estado subsidiario” en “Estado solidario”. “El malestar social fue negado por amplios sectores de las universidades y por la prensa. Se hablaba de un malestar mítico para negar que el modelo neoliberal podía producir descontento, que Chile no era una sociedad feliz”, dice Hassan Akram, periodista y autor del libro *El estallido*, sobre las manifestaciones de 2019.

Jaime Bassa y Rodrigo Karmy Bolton coinciden en que el proceso constituyente, resultado de lo que fue llamado en la época “Acuerdo

de paz”, nació como un intento de controlar la insurrección de 2019: “Fue un acuerdo que permitió la permanencia de Piñera hasta el fin de su mandato” (comunicación personal, marzo de 2022), dice Kar-my Bolton. No sería la primera vez que, ante una insurrección popular, se levanta la promesa de una asamblea constituyente como una forma de sacar al pueblo de las calles. Quien conoce la historia de la Revolución Rusa en sus primeros meses sabe del papel efectivo de la Asamblea Constituyente en ese contexto. Tanto es así que la exigencia de conquistar 2/3 de los votos en la cámara constitucional para escribir las leyes en la constituyente chilena fue denunciada en la época como una forma de paralizar todo el proceso. Pero, de forma completamente inesperada, la derecha chilena no consiguió ni 1/3 de representantes.

Al final, Chile eligió 155 diputados constituyentes, de los cuales sesenta y cinco eran independientes, es decir, no estaban vinculados a ninguna estructura partidaria, pero unidos, como los veinticuatro constituyentes de la Lista del Pueblo, por la defensa de un “Estado ambiental, igualitario y participativo”. Setenta y nueve constituyentes eran mujeres, convirtiéndose en la única Asamblea Constituyente de la historia mundial en tener mayoría de mujeres. Diecisiete eran de pueblos originarios, estando gran parte de las etnias presentes: mapuches, aymaras, atacameños, collas, quechuas, rapa nui, yá-manas, kawashkars, diaguitas y changos. La derecha, que esperaba alcanzar al menos 1/3 para poder bloquear las modificaciones constitucionales, solo tuvo treinta y siete diputados.

## **La fuerza de las repeticiones históricas**

Pero volvamos a la cuestión de las fuerzas que sostienen los procesos insurreccionales. Las dinámicas de la desidentificación suelen requerir el apoyo en procesos históricos silenciados. Una vez más, hay que recordar que la política desconoce espacios vacíos. Por ello, los procesos de destitución nunca son situaciones de “anomia”

generalizada o de indeterminación paralizante. La figura de las masas descontroladas y violentas, animadas por un supuesto “deseo puro de destrucción” no es más que una figura tradicional del pensamiento conservador, utilizada en todo proceso revolucionario real para descalificar la imaginación creadora de las masas. Históricamente, todos los procesos insurreccionales descritos como “violentos” y “negativos” (Comuna de París, Revolución Haitiana, momento jacobino de la Revolución Francesa, revuelta campesina alemana) fueron momentos marcados por una gran creatividad institucional y modificación de las estructuras de reproducción material de la vida social.<sup>10</sup>

De hecho, las dinámicas destituyentes son dinámicas de negación determinada incrustadas en la reverberación de procesos históricos reprimidos. Tales procesos históricos son las marcas de la sobreterminación de los lugares en los que se producen los acontecimientos. En el caso chileno, hay claramente tres procesos reprimidos que se superponen. El primero está relacionada con las latencias de la experiencia histórica de lo que en los años setenta se llamó “la vía chilena al socialismo”. El segundo se refiere a la emergencia de la centralidad de las luchas indígenas en la reconfiguración institucional del país. Por último, está la emergencia del feminismo en este país que, hasta 2004, tenía una ley de matrimonio civil que databa de 1884 y que, entre otros arcaísmos, impedía de facto el divorcio. Pero empecemos por el primer caso.

<sup>10</sup> Solo por poner un ejemplo, recordemos lo que dice Kristin Ross sobre la Comuna de París: “La Comuna fue un laboratorio de invenciones políticas, improvisadas en el momento o montadas a partir de escenarios y expresiones del pasado, repensadas según las necesidades del momento y alimentadas por deseos nacidos en el curso de las reuniones populares al final del Imperio” (2015, p. 17). Durante este período, las escuelas se recrearán como establecimientos gratuitos, laicos, universales y mixtos; se inventarán las guarderías públicas; las mujeres se organizarán en la Unión de Mujeres; se reconocerá la unión libre; en tanto que República Universal, la Comuna dará forma a un internacionalismo institucionalizado; los artistas (en particular los pintores y escultores) lucharán por la “inauguración del lujo comunal”. En otras palabras, la Comuna representa la liberación de la inteligencia de la clase trabajadora en la reconstrucción de los procesos materiales de reproducción de la vida.

Esta sobredeterminación expone, a su manera, tres condiciones necesarias para el paso de una insurrección a la instauración de una nueva institucionalidad:

- En primer lugar, existe una *repetición histórica* de los procesos traumáticos con vistas a suspender la melancolía social que producen.
- En segundo lugar, esta repetición debe, a su vez, articularse a otra repetición que nos lleva a una especie de fantasía original. Como en toda elaboración de traumas, se trata de operar en dos tiempos, siendo que uno de esos tiempos nos reenvía a una escena en la que encontramos la violencia del origen, sus exclusiones estructurales y sus producciones de destierro.
- Por último, esta dinámica necesita *una fuerza organizada más avanzada y estructurada* que pueda sostener el proceso de movilización a mediano o largo plazo.

Cuando estaba a punto de suicidarse en medio de la resistencia contra un intento de golpe de Estado, Salvador Allende pronunció un conocido discurso a Radio Magallanes. Terminó con las siguientes palabras: “Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”. Hasta nosotros han llegado las grabaciones de ese discurso. En medio del tono metálico de las transmisiones de otrora, se oye también el ruido blanco de las antiguas emisiones en mono, lo que aumenta involuntariamente el carácter solitario de la voz. Emitida directamente desde el Palacio de La Moneda bajo bombardeo, esa bien podría ser la voz de un trauma histórico, con su fuerza propia de producción de melancolía capaz de atravesar décadas. La vía chilena al socialismo terminaba con bombas, suicidios y voces solitarias. Cuando juraba como presidente de Chile, Gabriel Boric terminó su discurso en el balcón del mismo Palacio de La Moneda con la frase: “Estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el

hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor”. La repetición conmovió hasta las lágrimas a la multitud congregada frente al Palacio. El gesto expresaba una apuesta alta, que ningún gobierno había tenido el valor de hacer desde el final de la dictadura de Pinochet. Se apostó por una suspensión del trauma y una reanudación de la historia interrumpida. Era una apuesta aún mayor porque también consistía en decir que los cuarenta y ocho años que unen las dos sentencias pronunciadas en el mismo lugar por la misma persona simbólica (el presidente de Chile) eran solo un intento de borrar un proceso histórico que ahora retornaba.

Recordemos algunos rasgos fundamentales de la experiencia chilena de Salvador Allende. Mientras el resto del continente buscaba abrir su horizonte progresista a través de pactos y alianzas propias del populismo de izquierda (principalmente en Brasil y Argentina), creyendo en posibles asociaciones entre sectores de las burguesías nacionales y las demandas populares, integrando a las capas populares en el proceso político a través de la paradójica preservación de los intereses de las oligarquías descontentas, Chile buscaba otro camino, algo que se conoció en su momento como “la vía chilena al socialismo”. Esta vía tenía tres características principales y rompía con la dicotomía que se había establecido desde finales del siglo XIX entre dinámica revolucionaria y pacto reformista.

En primer lugar, la vía chilena se basaba en un claro rechazo a militarizar los procesos revolucionarios. La conquista del poder se produjo a través de procesos electorales y la organización que articuló tal victoria, la Unidad Popular, no funcionaba bajo la dinámica del centralismo democrático, ni de la tendencia convergente hacia un partido único y el mando concentrado en las cúpulas. Era un frente, pero un frente compuesto por estructuras de izquierda (socialistas, comunistas, radicales, socialdemócratas, democristianos disidentes, MIR, MAPU) y movimientos populares. El siglo XX había visto muchos procesos revolucionarios que se degradaron en sociedades militarizadas, procesos que recompusieron la lógica social sobre la base del tema de las guerras interminables. El camino chileno fue el más

significativo para intentar otro camino. Autores como Marcelo Casals llegan a afirmar que uno de los méritos de la experiencia chilena ha sido separar el concepto de “revolución” del de “violencia” en un dramático equilibrio entre ruptura y estabilidad (Casals, 2017). Esto nos lleva necesariamente al segundo punto, a saber, el carácter real de las rupturas. Porque se trataba de operar progresivamente con cambios claros en el orden económico. Hablamos de un gobierno que nacionalizó la banca, que nacionalizó el principal sector de la economía chilena de la época, las minas de cobre, que promovió la autogestión de las fábricas mediante la creación de sesenta y un “cordones industriales”. En otras palabras, la lógica en funcionamiento no era la que conocemos en las coaliciones populistas de izquierda y que consiste en “ganar tiempo”, en tratar de integrar económicamente a las capas pobres de la población sin modificar estructuralmente las relaciones de producción. El modelo chileno careció de un proceso de “cadenas de equivalencias” entre demandas contradictorias provenientes tanto de los sectores populares como de las oligarquías descontentas, que es una característica fundamental de las estrategias populistas latinoamericanas. Por el contrario, se trataba de aplicar un claro programa económico marxista mediante una dinámica de conquista gradual.

Por último, este proceso fue impulsado por una efectiva cultura de combate. En otras palabras, la cultura se movilizó como campo de producción de la sensibilidad revolucionaria. Por ello, una de las figuras más emblemáticas de la violencia contrarrevolucionaria fue el asesinato del músico Víctor Jara, a quien le cortaron las manos en el Estadio Nacional mientras los militares le ponían una guitarra delante y le decían: “Toca ahora”. Estas historias, por muy silenciadas que estén, nunca quedaron efectivamente en el pasado. En cada levantamiento que vivió Chile a partir de 2006 retornaron las consignas, las imágenes, las canciones. No se trataba de una simple cita, sino de la clara conciencia de que toda dinámica de transformación es una repetición.

Puede parecer paradójico asociar transformación y repetición, pero la paradoja no existe. Para que las transformaciones sean posibles, es necesario en primer lugar liberar el pasado de su exilio, liberar los cuerpos de la melancolía. Esto significa volver a representar las derrotas y hacer de ellas victorias. Hemos afirmado que el tiempo histórico no es una sucesión de instantes. Comprender esto es fundamental para entender de dónde viene esta fuerza indescriptible cuando las poblaciones deciden no abandonar las calles, aunque estén bajo el fuego de las armas y los tanques. La fuerza surge de la encarnación de luchas pasadas, surge de la encarnación en un cuerpo político de un amplio espectro temporal. La fuerza proviene de comprender que estamos escenificando de nuevo batallas que han tenido lugar y que se han abierto de nuevo.

Esta proyección hacia el futuro incluso en el momento de la derrota no es simple “mesianismo”. Es la máxima astucia de la inteligencia política que utiliza la proyección temporal para sacudir un presente que se cierra, una derrota que no se cansa de repetirse cada día. La misma inteligencia que mostró Allende cuando terminó su último discurso, en pleno golpe, recordando que: “más temprano que tarde volverán a abrirse las grandes alamedas”. Sin embargo, la relación entre estos dos momentos de la historia chilena es un delicado punto de divergencia. Luis Mesina, dirigente sindical crítico con el actual gobierno y principal portavoz del movimiento No+AFP, cree que vendrán varias capitulaciones: “La izquierda que tenemos es una izquierda sin principios, que se cree capaz de crear un capitalismo un poco más humano, que ha renunciado a luchar por una nueva forma de vida social” (comunicación personal, marzo de 2022). Recuerda los reveses sufridos en la lucha por el fin del sistema privado de pensiones y desconfía de un proceso que no esté guiado por el conflicto entre el Capital y el trabajo. Del mismo modo, Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y precandidato a la presidencia de Chile por el Partido Comunista de Chile, cree que “hay bastantes compañeros, fundamentales para la victoria de este gobierno, que no están dispuestos a pagar el mismo costo”. Con “el mismo costo”, Jadue se refiere a la

participación del Partido Comunista en el segundo gobierno de Michele Bachelet, donde, en nombre de la gobernabilidad, el partido se vio a menudo obligado a aceptar y apoyar propuestas que chocaban frontalmente con su propio programa. Lo que justifica por qué insiste en que “[l]os comunistas no están dispuestos a pagar siempre la factura de la unidad”. Jadue reconoce que este será un gobierno en disputa, como lo habría sido el segundo gobierno de Bachelet: “pero hay una diferencia importante. En el gobierno de Bachelet la hegemonía estaba del lado de las fuerzas conservadoras, mientras que ahora la hegemonía está del lado de las fuerzas transformadoras”.

En este contexto, llama la atención cómo en la mayoría de nuestras entrevistas apareció una clara dicotomía entre “gobierno” y “proceso”: “No confío en el gobierno, pero confío en el proceso” fue una frase constante. Y por “proceso” no solo hay que entender el proceso constituyente que vive Chile. “Proceso” indica también el campo de luchas en acción que creían ganaría un campo aún mayor con los avances esperados por la nueva Constitución o con la posibilidad de discutir transformaciones sociales a partir de alternativas reales a los modelos políticos y económicos vigentes.

Sobre lo que está en juego en este proceso, cabe recordar cómo, cuando comenzaron, las manifestaciones de 2019 pronto encontraron una palabra que, a su manera, funcionó como clave para la descripción del espíritu general, a saber, dignidad. No es casualidad que Plaza Italia, punto de partida de las manifestaciones, fuera rebautizada como “Plaza de la Dignidad”. Esto no deja de tener relación con lo ocurrido años antes en otro proceso de levantamiento popular, en este caso la Primavera Árabe. Porque allí también se produjo la aparición de un significante central para las luchas: “respeto”.

Quizás estas palabras expliciten un eje central de las luchas políticas de nuestro tiempo. Las luchas en nombre de la dignidad, del respeto, entienden que la condición de sujeto político no está asegurada. No se trata solo de cuestiones ligadas a la integridad personal y a las condiciones de desarrollo de la persona individual. En latín, como no se cansó de exponer Cicerón, *dignitas* está cerca de *autoritas*. Es decir,

con el ejercicio legítimo de la capacidad de decidir. También está presente en “dignatario”, como aquel que representa a un cuerpo social ante el extranjero. Un movimiento hecho por personas que exigen dignidad es un movimiento que lucha por demostrar que todas las personas tienen *autoritas* por expresar el mismo cuerpo social por venir.

## **El factor indígena**

Otro eje del proceso reprimido que retorna ahora se refiere a la matriz colonial del Estado-nación chileno. Como se dijo anteriormente, el proceso de repetición histórica está muchas veces conectado con un proceso temporalmente más amplio, vinculado al intento de atravesar los fantasmas originarios ligados a la fundación del Estado. Esto explica por qué una de las transformaciones más expresivas que propuso el proceso constituyente chileno fue el fin del Estado-nación. La noción de Estado Plurinacional fue algo que se afirmó como consenso entre los diversos grupos que aparecían como motores de las demandas de transformación social y fue impulsada por los constituyentes que representaban a los pueblos originarios. “Un Estado Plurinacional significa asumir que hay pueblos que preexistieron al Estado y que por lo tanto tienen derecho al reconocimiento de sus creaciones sociales y a su libre determinación” (comunicación personal, marzo de 2022), dice Enrique Antileo, antropólogo y activista de la causa mapuche: “Significa también reconocer que nuestros pueblos han sido objeto de usurpación y robo. En otras palabras, el Estado chileno se fundó sobre el robo” (comunicación personal, marzo de 2022).

De hecho, la invención jurídica del Estado Plurinacional, implantada por primera vez en Bolivia en 2009, rompe radicalmente la tríada Estado-nación-pueblo que se ha naturalizado en la experiencia política moderna: “La plurinacionalidad es lo mínimo que nos merecemos” (comunicación personal, marzo de 2022), dice Daniela

Catrileo, escritora, feminista y activista mapuche. Recuerda que los movimientos mapuches se dividen entre los que reivindican la autonomía como separación y los que buscan conjugar las posibilidades de la plurinacionalidad: “Yo pasé de una posición a la otra” (comunicación personal, marzo de 2022), dice Daniela.

Por un lado, el reconocimiento de que la formación del Estado nacional se basó en una usurpación es una forma de situar la noción de legitimidad por encima de la noción de legalidad. La propiedad, legal por estar reconocida por el derecho vigente, puede entenderse como ilegítima y objeto de devolución o susceptible de reparación. De hecho, esta reconfiguración global de la propiedad implica una profunda reconfiguración del país y de su autocomprensión.

Sin embargo, estaba claro que tal proceso no podía avanzar sin resistencia. El 9 de marzo de 2022, el edificio de la Asamblea Constituyente chilena estaba rodeado de carruajes clásicos y una multitud de huasos a caballo. Los “huasos” son campesinos que en muchos aspectos se parecen a los gauchos. Ataviados con sus trajes tradicionales, se manifestaron contra los proyectos de ley constitucionales que pretenden prohibir el rodeo. Pero eso no fue todo: “Cada pueblo tiene su folclore. Quieren destruir el nuestro, nuestra bandera, nuestro himno, nuestras tradiciones” (comunicación personal, marzo de 2022), declaró López Hortero, uno de los numerosos manifestantes presentes en el lugar. En otras palabras, este cuestionamiento de los mecanismos de propiedad que constituyen la base jurídica del país pasa necesariamente por problematizar lo que es efectivamente “propio” de un territorio que se descubre habitado por una multiplicidad de pueblos que, para empezar, no necesitaban el Estado-nación. Lo que explica que Enrique nos recuerde que “aceptar que somos pre-existentes al Estado chileno significa también que queremos seguir siendo pueblos, que somos pueblos capaces de crear futuro”.

Esta capacidad de crear futuro traza una serie de nuevos desafíos. Quizás uno de los más complejos se refiere a la tensión en los modos de producción. La preexistencia de ciertos pueblos no solo se mide por los dispositivos jurídicos del Estado-nación, sino también

en relación con las exigencias productivas y extractivas del proceso capitalista de acumulación y producción de valor. Pero ¿qué se puede lograr entonces en el contexto de un gobierno que, como dice el propio Enrique, “tratará de navegar suavemente, de producir cambios de forma gradual”? (comunicación personal, marzo de 2022).

De hecho, la lucha antiextractivista es uno de los principales ejes de debate en un país exportador de materias primas, principalmente minerales como el cobre, que representa el 51,9 % de las exportaciones chilenas, así como pescado (3,5 %) y pulpa de celulosa química (2,8 %). Tanto la región del norte, por el cobre, como la del sur, por la industria de la celulosa, conocen la brutalidad del impacto medioambiental del extractivismo.

Cristina Dorador fue diputada constituyente por Antofagasta. Como científica y activista ecológica, insistió en que: “desde que nos constituimos como nación hemos sido entendidos como lugares de desarrollo, no como lugares de producción de desarrollo humano”. Esto es particularmente claro en un país que, habiendo sido el primer laboratorio mundial del neoliberalismo, actualmente tiene hasta su agua privatizada y transformada en proceso de producción de valor. De hecho, Chile es el único país del mundo donde el agua está privatizada. El resultado de esto es, por ejemplo, una comuna de treinta mil habitantes como Petorca, sin agua potable y dependiente de camiones aljibe para su supervivencia. Algunos barrios de esa comuna tienen agua solo cuarenta y cinco minutos al día. Por ello, uno de los puntos centrales de la lucha de Cristina fue la transformación del agua en un Derecho Fundamental.

Notemos cómo la cuestión indígena es un dispositivo central en los levantamientos latinoamericanos. Estuvo presente en otros levantamientos populares de los últimos años, como los que vimos en Colombia (2021) y Ecuador (2019) y fue un elemento estructurante de la experiencia boliviana. Esta abre otro eje de repeticiones históricas con la fuerza de suspender los procesos de constitución del Estado-nación y sus dinámicas de colonialismo interno. La unidad de las naciones latinoamericanas se construyó a través de un proceso

de expansión colonial interna que no fue reconocido como tal. Esta matriz expansionista toca, al mismo tiempo, a sujetos colocados por el imaginario occidental en la condición de naturaleza “primitiva” y “salvaje” como factor a ser “domesticado” y sometido a la lógica de la rentabilidad capitalista. La construcción de un pacto social nunca antes existente tiene la fuerza de tensionar los procesos de unificación económica permitidos por el Estado-nación, creando en estos países un desarrollo desigual pero combinado, fundamental para los brutales niveles de expoliación del trabajo típicos de América Latina, donde las masas indígenas circulan entre la sujeción al trabajo abstracto y la sumisión al trabajo doméstico gratuito.<sup>11</sup>

### **El feminismo como vanguardia avanzada**

“Este es un gobierno feminista”. La frase es de Gabriel Boric al presentar su gobierno. De hecho, comentarios como este reconocen el protagonismo del movimiento feminista chileno en el proceso insurreccional. No en vano uno de los ejes del actual imaginario político chileno se encuentra en la realización de lo que se ha denominado el “Estado paritario”. En distintos momentos, los movimientos feministas fueron los responsables de sostener la dinámica de luchas que dieron fuerza al levantamiento popular. Hoy se muestra claramente como un movimiento dotado de transversalidad generacional y rechazo explícito al horizonte de pensamiento conservador, aún fuerte en Chile. Esto no impide ver cómo uno de los ejes del ciclo de luchas sociales que hoy se despliega pasa por la composición de una unidad real que no será sencilla.

El problema no es exclusivamente chileno, sino que atraviesa las tensiones propias de nuestro tiempo. La comprensión de los componentes de género y raza en la dinámica de expoliación del Capital siempre ha estado presente dentro de las luchas sociales. No es por

<sup>11</sup> Sobre esta doble matriz de expolio del trabajo, véase Lazzaratto (2022).

otra razón que procesos de cambio estructural, como la Revolución Soviética, fueron inmediatamente acompañados por la brutal transformación de las relaciones de género y la búsqueda de la igualdad real. Sin embargo, no son pocos los que temen que “la unidad como valor fundamental” ya no esté a la orden del día, con el consiguiente aplazamiento sin fin de las luchas estructurales entre el Capital y el trabajo. Como Daniel Jadue al afirmar: “este es un serio problema que limita la capacidad transformadora de los procesos políticos” (comunicación personal, marzo de 2022) o Luis Mesina, que ve estas luchas como un sector del pensamiento liberal sin vínculo orgánico con sus propias luchas.

Podríamos ver en estas reacciones expresiones de una izquierda dislocada del momento histórico actual y de su propia dinámica, una izquierda de viejos dirigentes sindicalistas y comunistas. Pero por más que leamos libros universitarios sobre la interseccionalidad de las luchas, lo cierto es que en Chile se vive de manera dramática y se ve como un desafío para la constitución de la unidad de un proceso con una multiplicidad de actores que van desde comunistas históricos a mapuche, feministas, autonomistas, sindicalistas, entre muchos otros. La ordenación global de las luchas nunca se ha intentado en una situación de gobierno, al menos hasta ahora.

Mesina da un ejemplo de lo que realmente entiende por unidad:

Hubo un momento en las luchas contra el sistema privado de pensiones en que los estudiantes se unieron a ellas. No era necesariamente una cuestión que se refiriera directamente a los intereses de los jóvenes, pero hubo este gesto de luchar por lo que no era la expresión inmediata de mis intereses (comunicación personal, marzo de 2022).

Luchas por lo que no es la expresión inmediata de mis intereses más directos y claros. Luchar por los que no son como yo, ocupar el lugar de los que no son como yo.

El 8 de marzo de 2022, días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, las calles de Santiago fueron tomadas por más de doscientas mil mujeres. Las convocatorias a las manifestaciones del 8 de

marzo llamaban a realizar actos: “feministas, antirracistas, anticapitalistas, antifascistas, antiextractivistas”, entre otros. Sin embargo, es cierto que algunos temas se integran más fácilmente que otros, sobre todo en un gobierno consciente de la dificultad de modificar las estructuras fundamentales del modo de producción capitalista. Y es sobre este punto sobre el que gira toda la tensión de los procesos políticos actuales en el mundo. Es posible que las dinámicas de transformación en determinados sectores sean aceptadas de forma menos problemática que en otros, creando un ritmo de transformaciones que puede, incluso, admitir la parálisis en varias demandas y, con ello, generar la impresión social de que las demás transformaciones simplemente no llegarán. Esto nos recuerda cómo la construcción de la unidad popular, eje central de la dinámica de las luchas chilenas hace cincuenta años, será obra de procesos en movimiento.

## **La construcción de la derrota**

El 4 de septiembre de 2022 la nueva Constitución chilena fue rechazada por el 62 % de los votos. Sería difícil encontrar ejemplos en la historia mundial de una población que convoque un proceso constituyente solo para rechazarlo dos años después. Ante semejante derrota, la izquierda latinoamericana movilizó sus dos explicaciones estándar utilizadas para situaciones similares: la traición de las clases dominantes y la incapacidad de las masas para actuar desde sus propios intereses. Es decir, los dos culpables clásicos, a saber, el gobierno de izquierda que traicionó su propio mandato y la prensa que confunde al pueblo y propaga mentiras. De hecho, el gobierno de Boric tuvo que lidiar, durante sus primeros meses, con bajos niveles de aprobación. En efecto, la prensa latinoamericana tiende a actuar como un partido político conservador en casos similares y el uso de *fake news* no es infrecuente. Pero estas explicaciones son insuficientes para explicar una reacción de esta magnitud.

Sería más correcto tratar de entender los principales puntos que motivaron el rechazo, así como los riesgos y límites de una dinámica de transformación constitucional, como la intentada en Chile. En este sentido, recordemos que una encuesta realizada por el instituto Feedback a fines de julio de 2022 señalaba dos puntos como razones fundamentales del rechazo: “no todos serán iguales ante la ley” (39 %) y “con la plurinacionalidad, Chile corre el riesgo de dividirse” (31 %). Recordemos que el 75 % de los electores de la Araucanía, región militarizada del sur de Chile donde se desarrolla un conflicto entre los mapuches y la industria extractiva maderera, votaron por el rechazo a la nueva Constitución. Otros temas, como la creación de una democracia paritaria, el derecho al aborto, el fin del senado y el derecho a la reelección aparecieron como posibles elementos impulsores del rechazo, pero no hubo ninguno que se situara tan claramente en el centro de las decisiones como la plurinacionalidad. Sería entonces el caso de comprender mejor los retos de tal transformación.

En retrospectiva, se puede plantear la dificultad de exigir que una constitución con sus 388 apartados sea plebiscitada en bloque. Es decir, dice algo importante sobre la estrategia de transformación constitucional vía plebiscito, a saber, que no es posible rechazar solo algunas leyes. Del mismo modo, no es posible aprobar una parte y separar otra para futuras discusiones. La figura de un poder soberano popular unificado crea la ilusión de que todas las leyes que emanen de un proceso constitucional serán igualmente reconocidas por la población como expresión de su voluntad. Pero esto no es más que un dogma. La creación de un “plebiscito de salida”, y no solo de un plebiscito de convocatoria, ya presupone la posibilidad de que los representantes de la soberanía popular no traduzcan adecuadamente los anhelos populares. Por lo tanto, si hay un plebiscito de salida, también debe existir la posibilidad de aprobar solo bloques de leyes, y no la Constitución en su totalidad.

Pero en cuanto al problema específico del Estado Plurinacional, hay que reconocer que efectivamente pone en cuestión una cierta noción de igualdad basada en el principio de “la misma ley para todos”.

Sin embargo, esta noción se rompe para permitir la defensa de que un territorio está constituido por múltiples formas sociales portadoras de demandas de libertad y justicia. Tales demandas han creado distintos sistemas jurídicos y prácticas sociales enterrados por el desarrollo de la modernización capitalista. El Estado-nación, en países con historia colonial como Chile, nace del borramiento de tales formas sociales y se perpetúa a través de su continua descalificación. Para justificarse, es necesario que el Estado-nación siga repitiendo que tales formas sociales eran “atrasadas”, incapaces de satisfacer las demandas sociales de libertad. Esto significa seguir violentando, en el presente, a los pueblos originarios con sus conocimientos y prácticas. En otras palabras, el Estado-nación debe perpetuar las operaciones de borrado y bloqueo del reconocimiento. En este sentido, la plurinacionalidad trae efectivamente la experiencia de una nueva configuración de lo que significa “territorio”, posibilitando la constitución de estructuras institucionales capaces de lidiar con la multiplicidad de temporalidades e historicidades que se despliegan en un mismo espacio. Esto no significa que esta nueva configuración sea menos democrática e igualitaria que la puesta en circulación por el Estado-nación. Al contrario, podemos incluso decir que es un paso fundamental hacia la institucionalización de una democracia real, ya que parte de la confianza en que el reconocimiento de la multiplicidad histórica que conforma el territorio es una forma de entender cómo los pueblos son productores de la experiencia de la libertad.

Pero no es desprovisto de razón que las poblaciones quieran garantías de que el fin del Estado-nación no significará fragmentación y creación de nuevos privilegios. La discusión sobre la plurinacionalidad era casi inexistente en Chile hace tres años, no había aún una acumulación de debates y experiencias. Por lo tanto, no carece de racionalidad que su presentación dentro del debate político bajo la forma de un abrupto cambio constitucional termine despertando los temores más atávicos y primarios. Siendo el Estado-nación un fantasma fundamental, una fantasía originaria, su ruptura requiere saber lidiar con la enorme cantidad de angustias, reacciones e

incertidumbres que tal medida necesariamente producirá. Es posible que la experiencia constitucional chilena haya demostrado que modificaciones de esta naturaleza solo pueden ocurrir a través de un proceso de larga duración y de manera gradual, o solo después de una larga acumulación de luchas, más aun considerando que sectores de la lucha mapuche son efectivamente separatistas y que la población indígena en Chile es minoritaria (12 %).

Esto significa que cambios que tocan puntos fantasmáticos de la organización de la vida social, como el sostenimiento de la tríada Estado-nación-pueblo, no pueden hacerse sin sistemas de garantías y experiencias previas a escala, muchas veces, regional. Quien pretenda franquear fantasías debe estar preparado para el surgimiento de reacciones profundas que expresen antagonismos estructurantes de la vida social.

En este sentido, hay que terminar recordando que las afirmaciones sobre la dificultad de construir la unidad en el campo de las luchas sociales indican un desafío adicional explosivo y tocan el problema de lo que podríamos llamar “sistemas de garantías”. En una situación histórica de retracción general de las macroestructuras de protección social, la gente quiere garantías de que las políticas de defensa de los sectores más vulnerables de la población no dejarán desprotegidos a otros grupos. No es sensato decirle a alguien que es hombre, blanco, conductor de Uber, que trabaja doce horas al día en condiciones absolutamente precarias, sin ningún derecho, que el Estado no considera prioritario su sufrimiento social.

Sin embargo, la izquierda tiene actualmente grandes dificultades para articular un discurso que sitúe al mismo nivel de prioridad y sensibilidad el empobrecimiento generalizado y las múltiples luchas por el reconocimiento. Es excelente escribiendo sobre la necesidad de evitar tales dicotomías, pero es pobre cuando, más allá del universo de los artículos y escritos académicos, necesita dar respuestas precisas a situaciones concretas de la vida política cotidiana. Saber construir esta ecuación de unidad, sin embargo, es algo que sigue siendo una tarea para el futuro.

## Bibliografía

- Agamben, Giorgio (2004). *Estado de exceção*. São Paulo: Boitempo.
- Agamben, Giorgio (2016). *A comunidade que vem*. Belo Horizonte: Autêntica.
- Alliez, Eric y Lazzaratto, Maurizio (2021). *Guerras e capital*. São Paulo: Ubu.
- Arantes, Paulo (2018). *O novo espírito do mundo*. São Paulo: Boitempo.
- Badiou, Alain (2011). *Le réveil de l'histoire*. París: Seuil.
- Balibar, Etienne; Negri, Antonio y Tronti, Mario (2021). *Le démon de la politique*, París: Amsterdam éditions.
- Casals, Marcelo (2017). *El alba de una revolución: la izquierda y la construcción estratégica de la vía chilena al socialismo*. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica.
- David-Ménard, Monique (2022). *A vontade das coisas*. São Paulo: Ubu.
- Ingimundarson, Valur; Urfalino, Philippe y Erlingsdóttir, Irma (2016). *Iceland's Financial Crisis: the Politics of Blame, Protest, and reconstruction*. Nueva York: Routledge.
- Karmy Bolton, Rodrigo (2019). *El porvenir se hereda: fragmentos de un Chile sublevado*. Santiago de Chile: Sangría.
- Laclau, Ernesto (2010). *La razón populista*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Lazzaratto, Maurizio (2022). *O intolerável do presente, a urgência da revolução*. São Paulo: N-1 Edições.

Ross, Kristin (2015). *L'imaginaire de la commune*. París: La fabrique.

Safatle, Vladimir (2016). *O circuito dos afetos*. Belo Horizonte: Autêntica.

Streeck, Wolfgang (2016). *How will capitalism end? Essays on a failing system*. Londres: Verso.

Tronti, Mario (2016). *Ouvriers et Capital*. París: Entremonde.